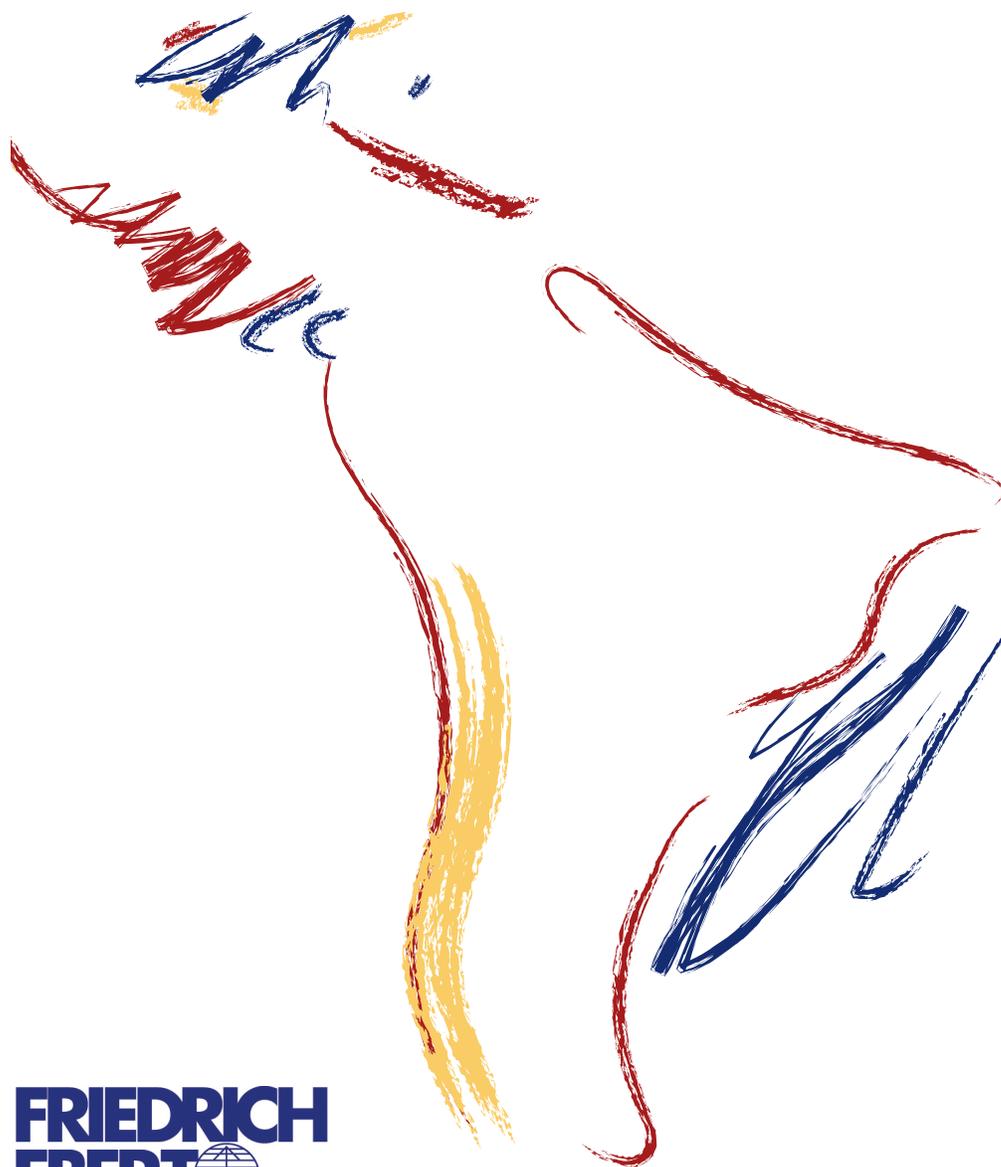


Documento de posición Política latinoamericana del grupo S&D

Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

La visión latinoamericana de los Socialdemócratas Europeos

Augusto Varas



Documento de posición Política latinoamericana del Grupo de la Alianza progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

Introducción

Una aproximación estratégica de los socialdemócratas europeos a la realidad latinoamericana no se entendería sin tener en cuenta el medio milenio largo de historia compartida entre Europa y América Latina, la larga coincidencia en valores, principios, modelo de sociedad, creencias y la convergencia de intereses frente o ante los fenómenos de la globalización.

Pocas regiones del mundo comparten tantas cosas con Europa. Más de mil millones de personas que, a veces sin saberlo, tienen las mismas aspiraciones y están profundamente ancladas en los valores de la libertad, de la democracia pluralista, del Estado de Derecho, del respeto a los derechos humanos (DDHH) y la solidaridad, que defienden el diálogo y la solución negociada de los conflictos, que respaldan el sistema de Naciones Unidas, que promueve el multilateralismo, que están en contra de la pena de muerte, a la excepción de Cuba. Si a ello añadimos los fuertes lazos comerciales, de inversión y de ayuda al desarrollo, comprenderemos que la Unión Europea (UE) y América latina (AL) están llamadas a entenderse, que están abocadas a una relación estratégica birregional en beneficio de ambas partes.

¿Alguien podría demostrar que ese cuadro convergente se repite entre otras dos regiones del mundo fuera de la UE y AL? Pero es que además la evolución política de los 20 países de América Latina (incluido Haití) ha ido llevando a la izquierda al poder por vía electoral en la mayor parte de la región en un movimiento que ya no asemeja a una reacción pendular sino a una posible tendencia estructural porque la hegemonía progresista se prolonga ya por más de una década.

El afianzamiento definitivo, consolidado, de la democracia en América Latina se dará cuando los gobiernos puedan cambiar y alternarse sin que ello suponga un riesgo para la estabilidad del país correspondiente.

Por otro lado, en este tema de la tendencia estructural conviene a ayudar a que Honduras recupere un gobierno democrático y reconocido como legítimo, y condenar cualquier intento de golpe de Estado, como

el muy reciente de Ecuador (intento de golpe de Estado de octubre de 2010).

Mientras la socialdemocracia europea sufre una crisis política y electoral en la mayor parte de los países de la UE, nuestros homólogos latinoamericanos gozan, en general, de buena salud, hasta el punto de que en el país más grande y poblado del continente, Brasil, en las elecciones de octubre de 2010 se disputaron la presidencia de la República dos candidatos que se reclaman ambos de la socialdemocracia, en buena parte porque ninguna contesta la herencia exitosa del presidente Lula, auténtico icono de la izquierda democrática y moderada latinoamericana y mundial. Pero el hecho demuestra que la derecha está en retirada en Brasil y parece que también en el segundo país más poblado, México, si bien ha reconquistado Chile y confirmado su hegemonía en Colombia.

El afianzamiento definitivo, consolidado, de la democracia en América Latina se dará cuando los gobiernos puedan cambiar y alternarse sin que ello suponga un riesgo para la estabilidad del país correspondiente

Pero esta realidad no debe hacernos ignorar que no toda la izquierda latinoamericana tiene la misma orientación ideológica e idéntica práctica política. A efectos expositivos tendremos que distinguir entre una izquierda democrática, moderada, respetuosa de las instituciones y cuyos líderes no intentan perpetuarse en el poder, es decir una izquierda que en Europa llamaríamos socialdemócrata; y por otra parte, una izquierda populista, caudillista, autoritaria, tendente a lograr la reelección indefinida de sus presidentes y no especialmente cuidadosa con la independencia de las instituciones ni con la libertad de expresión. Ambas reclaman como objetivos fundamentales la disminución de las desigualdades y la abolición de la pobreza.

Esta distinción de ambas izquierdas que a nosotros europeos nos parece evidente, no es compartida por

los actores de los partidos de ambas tendencias, que prefieren desarrollar un discurso inclusivo, abierto, que trata de concordar en todo aquello que les es común y no tratar o hacerlo de manera sutil, de aquello que eventualmente pueda separarlos. Varios ejemplos pueden ilustrar esta afirmación: no hostigar la dictadura cubana, rechazo al golpe de Estado de Honduras y a su defectuosa salida, crítica a las bases americanas en Colombia, son políticas que comparten ambas izquierdas, aunque las diferencias se evidencien entre los que ocupan los extremos del espectro dentro del concepto de izquierdas.

En cualquier caso, los socialdemócratas europeos y concretamente el grupo S&D tendrá no sólo que definir qué izquierda latinoamericana le es más afín, lo que parece obvio, sino también que desarrollar la naturaleza de las relaciones que quiere mantener con ella y cual es la relación que debemos mantener con la izquierda llamada populista, así como la manera de abordar las violaciones de los derechos humanos en un país de América Latina que se autodefinen como de izquierdas. Las violaciones de los derechos humanos son y seguirán siendo siempre violaciones de los derechos humanos independientemente del color del Gobierno y no deben ser ignoradas. Pues el hecho de que el Gobierno pertenezca a la izquierda populista, a la izquierda moderada o a la derecha no debe desempeñar ningún papel en caso de violaciones graves de los derechos humanos y no debe influir sobre la respuesta de los socialdemócratas europeos.

El documento aborda a continuación como cuestiones específicas la economía latinoamericana, las relaciones UE-AL en diversos terrenos, la integración regional y subregional, y sobre todo pone encima de la mesa los elementos para una estrategia del Grupo S&D hacia AL y las propuestas para una agenda de trabajo.

Las nuevas realidades de Latinoamérica

América Latina (AL) está formada por distintos bloques subregionales, y el conjunto se caracteriza por una gran diversidad geográfica que alberga a poblaciones indígenas y a otras procedentes de la inmigración europea, africana y asiática, si bien comparte patrimonio histórico, valores y lenguas próximos a los europeos. La práctica totalidad de sus 580 millones de habitantes

habla español o portugués. La región comprende países poco desarrollados (América Central, algún país de la región andina), y otros (Argentina, Brasil, Chile) donde la industrialización y el nivel de ingresos son relativamente elevados. La economía de Latinoamérica a precios de mercado (PPA), llega a ser la 4^o más grande y potente a nivel mundial con 6.08 trillones de dólares. El Producto Interior Bruto (PIB) medio regional por habitante, de unos 4.700 dólares, varía de unos países a otros (Nicaragua, 885 dólares; Argentina, 9.400).

La izquierda socialdemócrata europea ha de esforzarse por comprender que la realidad latinoamericana -sobre el fondo común de desigualdad social y pobreza, por tanto de injusticia social- es plural, diversa y cambiante.

La izquierda socialdemócrata europea ha de esforzarse por comprender que la realidad latinoamericana -sobre el fondo común de desigualdad social y pobreza, por tanto de injusticia social- es plural, diversa y cambiante

En el transcurso de la última legislatura europea (2004-2009), los países de AL experimentaron variados e intensos procesos políticos. En algunos casos observamos una consolidación de la democracia, no siempre lineal y progresiva como muestra el caso del golpe de Estado en Honduras, o en medio de duras condiciones sociales (Guatemala, El Salvador); en otros, observamos la apertura de procesos de cambio político con vocación de transformar el sistema económico y social (Bolivia, Ecuador, Venezuela). El resultado es que, tras años de inestabilidad política, en la primera década del siglo XXI dieciocho de los diecinueve países de AL viven bajo regímenes democráticos. Las dictaduras latinoamericanas se empiezan a estudiar en los libros.

Latinoamérica y la crisis económica y financiera

Hasta el primer semestre de 2010, la región está soportando relativamente bien la crisis. Tras de seis años de crecimiento, se estima una caída del PIB de América Latina y el Caribe (ALC) de 1,8% y del PIB por habitante cercana al 2,9% en 2009. El impacto de la crisis internacional fue muy intenso a fines de 2008 y a comienzos de 2009 y afectó a todos los países de la región. En el segundo trimestre comenzó una recuperación que se generalizó en la segunda mitad del año. El detenimiento del crecimiento afectó negativamente la demanda por empleo y, consecuentemente, se estima que la tasa de desempleo regional se incrementará alrededor de 8,3%, junto con un deterioro en la calidad de los empleos generados.

La salida de la crisis es más rápida que lo esperado, en gran medida por fortalezas que los países de la región construyeron gracias a políticas macroeconómicas más sanas. El renovado dinamismo de algunos factores que impulsaron la demanda en los años previos a la crisis, sumado al empuje proveniente de las políticas públicas permite, en un contexto de elevada capacidad ociosa, una rápida recuperación. Pero el reto es transformar esta recuperación en un crecimiento sostenido con equidad social más allá de 2010.

Aunque la pobreza viene disminuyendo en AL, la creación de riqueza se ha estancado en los últimos

La CEPAL concluyó que entre 2002 y la actualidad se registró una tendencia generalizada de reducción de la pobreza y la indigencia, un incremento en los ingresos de los hogares pobres, y una mejor distribución de los ingresos.

cincuenta años. Además, como es sabido, la región sigue siendo la más desigual del mundo, a pesar de la mejora en la distribución del ingreso.

2008 fue el último año de un sexenio caracterizado por la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad. En ese año la tasa de pobreza alcanzó 33,0%, 11 puntos porcentuales menos de lo registrado en 2002, incluyendo un 12,9% que vivía en condiciones de pobreza extrema o

indigencia. Aun cuando el incremento pronunciado del precio de los alimentos llevó a que la indigencia creciera en el último año, su incidencia equivale a dos tercios de la observada en 2002. Esta reducción de la pobreza provino principalmente de un incremento en el ingreso medio de la población, que fue complementado por las mejoras distributivas registradas en algunos países. Pese a los avances logrados, los niveles de pobreza en la región continúan siendo elevados y afectando en una mayor proporción a las mujeres y los niños.

Aunque la región se encuentre en mejores condiciones para afrontar la crisis que en otras coyunturas, ésta ha tenido y tendrá un impacto sobre los niveles de pobreza e indigencia. Se estima que en 2009 habría podido producirse un incremento de las tasas de pobreza e indigencia en torno a 1,1 y 0,8 puntos porcentuales respectivamente. Con ello, el número de pobres en la región aumentaría en cerca de 9 millones de personas, de los cuales más de la mitad serían indigentes.

Los progresos en la lucha contra la pobreza, cuyo balance -insistimos- habrá que atemperar con los efectos finales de la crisis, no impiden que la desigualdad en AL continúe siendo una de las más altas del mundo. Por consiguiente, avanzar hacia una mejor distribución de los ingresos y otros activos sigue siendo una de las tareas pendientes más importantes en el futuro.

Al comparar algunas cifras recientes con aquellas en torno a 2002 manejadas por la CEPAL se reafirma la tendencia observada hacia una mejor distribución del ingreso. Entre 2007 y 2008, varios países exhibieron una tendencia hacia la reducción de las disparidades entre los grupos extremos de la distribución del ingreso. Por ejemplo, el 10% más rico de los hogares concentra en promedio el 34% de los ingresos totales.

La participación de este grupo muestra la mayor heterogeneidad entre los países de la región, ya que los valores más altos bordean o superan el 40%, como en el Brasil y Colombia, y los valores más bajos no exceden del 27%, en Venezuela y Uruguay. Por su parte, el 40% de hogares con menores recursos, capta en promedio un 15% del ingreso total, es decir menos de la mitad de su participación en la población. En Venezuela y Uruguay, los países con la mejor distribución del ingreso de la región según la mayoría de criterios, este grupo recibe alrededor de la mitad de ingresos de lo que le correspondería según su participación en la población (20%). Los valores más bajos se registran en Bolivia, Honduras y República Dominicana y corresponden a participaciones inferiores al 12%.

De acuerdo con el informe de la CEPAL «Panorama social en América latina 2010», a pesar de la reciente crisis económica global, la pobreza y la indigencia cayeron 1 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente, comparados con 2009. La recuperación económica de la mayoría de los países de ALC tras la crisis financiera internacional permitió a la región volver a disminuir los índices de pobreza. Desde 2002 a la actualidad, la pobreza pasó de afectar a 44% de la población regional a 32,1%. La creación de empleos y al aumento de los ingresos familiares por salarios o programas sociales rompió con el estancamiento o tendencia en contrario de décadas. La CEPAL concluyó que entre 2002 y la actualidad se registró una tendencia generalizada de reducción de la pobreza y la indigencia, un incremento en los ingresos de los hogares pobres, y una mejor distribución de los ingresos, aunque sigue siendo la región más desigual del mundo. Pero el índice de Gini mejoró en casi todos los países, en especial en Brasil y

Venezuela. En efecto, el texto de la CEPAL destaca que la reducción de los niveles de pobreza se ha reflejado con mayor vigor en Venezuela, Argentina, Brasil, Perú y El Salvador.

Escenarios políticos

Se afirma de modo recurrente que, al término de la primera década del siglo XXI, los países de AL están gobernados mayoritariamente por fuerzas políticas de izquierda y de centro-izquierda. En efecto, a mediados de 2010, observamos que esas fuerzas políticas diversas gobiernan en trece de los diecinueve países latinoamericanos, mientras que la derecha está al frente de cinco (Chile, Colombia, Honduras, Panamá, México). En el caso de Chile, a comienzos de 2010, se produjo la derrota de la Concertación - integrada por los tres partidos chilenos de la Internacional Socialista (PS, PPD y PRSD), además de la Democracia Cristiana - que gobernó Chile durante los 20 años de democracia-, y la llegada al poder de la Alianza conservadora, en la que el partido de origen pinochetista (Unión Demócrata Independiente) es mayoritario.

Esta afirmación, cierta en términos generales, requiere algunas consideraciones a fin de ajustar nuestro análisis político.

En primer lugar, y según es comúnmente reconocido, el programa político de las fuerzas gobernantes en esos trece países corresponde a diferentes tendencias en el seno de la izquierda. Algunas fuerzas se definen como socialdemócratas al modo del socialismo europeo o llevan a cabo políticas de orientación socialdemócrata. Gobiernan aproximadamente la mitad de los países de la región. Los partidos de la Internacional Socialista están presentes en seis de esos gobiernos con diferentes fórmulas. Otras fuerzas y movimientos reivindican un proyecto transformador o «revolucionario» que tendría por objetivo la refundación de algunas repúblicas y asentar las estructuras económicas y sociales sobre nuevas bases. En cinco países se observa la aparición de partidos y movimientos que no sólo han dado al traste con los partidos tradicionales de la izquierda sino también con el sistema tradicional de partidos de sus respectivos países.

En segundo lugar, esos partidos y movimientos de izquierda y centro-izquierda lideran procesos políticos de diferente naturaleza. Unos gobiernan países con regímenes políticos democráticos estables. Otros,

de reciente acceso a las tareas de gobierno, tratan difícilmente de consolidar la democracia al tiempo que intentan afrontar las profundas desigualdades sociales de sus países a las que cabe sumar los efectos desestabilizadores derivados del narcotráfico, la criminalidad o las Maras en países institucionalmente débiles. Y otros proclaman su intención de llevar a cabo hondas transformaciones sociales y políticas, pudiendo derivar éstas en «nuevas formas» de democracia.

Por último, y ligado a la anterior consideración sobre la democracia, la mayoría de estos actores políticos se muestran respetuosos con una de las

reglas fundamentales de los regímenes democráticos: la alternancia política. En ciertos casos, se viene observando o bien una cierta ambigüedad en cuanto al propósito de respetar esa regla, o bien una tendencia autoritaria incompatible con la alternancia democrática. En algún caso paradigmático, como el de Venezuela, la orientación populista de izquierda radical se compatibiliza con el respeto a las normas mínimas de la democracia en términos electorales, tal como se demostró en las últimas elecciones celebradas en septiembre de 2010, cuyo desarrollo y resultados fueron avalados por los partidos de oposición, que obtuvieron una

representación parlamentaria suficiente para limitar las posibilidades de la mayoría gubernamental para legislar por decreto, si bien denunciaron una ley electoral que favorece escandalosamente a los partidos chavistas.

Por otra parte, la nueva victoria del centro-izquierda en Brasil desmentiría la tesis de un cambio de ciclo político y electoral en AL, tesis alentada por los sectores conservadores latinoamericanos y europeos.

Integración regional y relaciones con la Unión Europea

Durante la pasada legislatura europea y en lo que llevamos de la nueva, hemos asistido a procesos contradictorios en el ámbito de la integración regional de AL. La región dio un paso adelante y dos atrás. El paso adelante sería la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en mayo de 2008, cuya la Declaración fundacional se firmó el 8 de diciembre de 2004 en Cuzco. UNASUR está compuesta por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,

A mediados de 2010, observamos que esas fuerzas políticas diversas gobiernan en trece de los diecinueve países latinoamericanos, mientras que la derecha está al frente de cinco (Chile, Colombia, Honduras, Panamá, México).

Uruguay y Venezuela, con Panamá como miembro observador. Estos países acumulan una superficie de 17.715.335 km² y 386.529.000, de habitantes, con un PIB per cápita de 7.350 euros e ingentes recursos naturales, como, por ejemplo, el 42% de las aguas dulces del mundo. El objetivo proclamado de UNASUR es construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus integrantes, utilizando el diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, la financiación y el medio ambiente, entre otros, para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Entre las ambiciones de UNASUR no figura la creación de instancias supranacionales que impliquen cesiones de soberanía por parte de los Estados miembros como en el proceso de integración europea. UNASUR no es un proyecto político con mecanismos concretos de integración supranacional pero puede convertirse en un proyecto pragmático que, sobre la base de programas y acciones sectoriales de cooperación -por ejemplo en el campo de la energía o las infraestructuras- vaya construyendo un contexto político favorable a la integración subregional propiamente dicha.

Hemos de seguir apoyando este proyecto que concita apoyos en Suramérica, lo que es compatible con nuestra decidida apuesta por procesos de integración, como el centroamericano, MERCOSUR, o UNASUR (siendo éste un organismo de coordinación y profundización política al servicio de la integración regional).

En los procesos de integración se dieron, empero, dos pasos atrás en los últimos años. El primero se refiere precisamente a MERCOSUR, donde se han llevado a cabo insuficientes progresos en los mecanismos internos de cooperación e integración, con independencia de la creación del Parlamento de Mercosur (Parlasur), cuya sesión inaugural tuvo lugar el 8 de mayo de 2007. En consecuencia, MERCOSUR da muestras de falta de unidad de criterios para encarar la negociación del Acuerdo de Asociación con la UE, relanzada por la Cumbre de Madrid (mayo de 2010). El segundo paso atrás se refiere a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sumida en una crisis radical tras la retirada de Venezuela y por las dudas de otros dos países sobre su pertenencia a la CAN.

Si bien América Latina tiene una visión bastante más positiva de sí misma que en décadas anteriores, también mejora la opinión de los latinoamericanos sobre otros países y regiones: Estados Unidos queda

en primer lugar con un 74%, de opinión favorable, le sigue España con un 65%, Japón y la Unión Europea con 63%, Canadá y China con 58%, y Cuba con 41%.

A la Unión Europea le dan mejor evaluación: República Dominicana, El Salvador y Chile (65% de opinión positiva) mientras que es Panamá la que otorga la puntuación más baja con 38%.

Todo ello ha repercutido en las relaciones UE-AL en los seis últimos años, incidiendo negativamente en la ya de por sí modesta política latinoamericana de la UE. En esta política se han agrandado las sombras y se han ido apagando algunas luces. No obstante, la nueva legislatura europea nació con la realidad de un entramado institucional de las relaciones UE-AL no exento de potencialidades. Tenemos, por una parte, los Acuerdos de Asociación con Chile y México, susceptibles de nuevos y más ambiciosos desarrollos políticos. Además, en la Cumbre de Madrid de 2010 se concluyeron las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, de innegable valor simbólico, y el Acuerdo Comercial multipartito entre la UE y Colombia y Perú. Por otra parte, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat, constituida el 8 de noviembre de 2006) sigue abriendo expectativas al diálogo político entre la UE y AL.

Estos avances no han impedido que algunos acontecimientos en el panorama europeo e internacional hayan hecho que AL haya visto reducida su presencia en la agenda de la UE, hecho que trató de paliar, aun temporalmente, la Presidencia española de la UE (primer semestre de 2010). La incorporación de nuevos Estados sigue absorbiendo muchos esfuerzos de la UE hacia el centro y sureste europeo. Por otro lado, el aumento del peso político de la región Asia-Pacífico y el permanente conflicto en Oriente Próximo, continúan acaparando muchas energías en la política de relaciones exteriores de la UE.

Influencia de otras potencias en América Latina. Polarización de la región entre EEUU y Venezuela

No hay duda ninguna que la llegada de Obama a la presidencia de los EEUU, ha cambiado las relaciones que muchos países latinoamericanos tenían con su vecino del norte. La disputa entre EEUU y Venezuela ha polarizado en gran medida a la región.

Si bien la gran mayoría de los países de América Latina declaran que EEUU tiene una influencia positiva, tan

sólo dos piensan lo contrario: Argentina y Paraguay. No es cierto que los ciudadanos más críticos hacia EEUU sean los venezolanos.

Por el contrario, los latinoamericanos que creen que la Venezuela de Chávez ha influido positivamente en la región son los mismos venezolanos con un 54% y la República Dominicana con un 66%. El papel de Venezuela contrario a la administración norteamericana de la última década no ha tenido el impacto esperado en la población de la región.

Los últimos conflictos entre Colombia y Venezuela han afectado a la vasta mayoría de los ciudadanos latinoamericanos que no ve a Venezuela positivamente y sí la de EEUU; por la razón que Venezuela es vista en la región como el país que tiene más niveles de conflictos con el mundo mientras que a EEUU es visto como potencia interesada en resolver los problemas de su país.

Las relaciones UE/CHINA/AL

Durante la última década las exportaciones e inversiones chinas en la región han crecido espectacularmente. No en vano los dos últimos presidentes chinos, Jiang Zemin y Hu Jintao, han realizado diez visitas oficiales a la región entre 2001 y 2010. Una por año. Compárese con sólo tres giras del presidente Bush durante sus ocho años de mandato o con la escasa atención (con la excepción de España) prestada a la zona por los mandatarios europeos.

Fruto de esa pacífica ofensiva china es que comercio e inversiones han aumentado considerablemente. Tanto que las proyecciones sugieren que en 2014 China superaría a la UE y se convertiría en el segundo mayor mercado par las exportaciones latinoamericanas.

Y en cuando a las importaciones realizadas por Latinoamérica, se prevé que China supere a las UE en 2015.

Cabe, no obstante, hacer aquí una interesante reserva. La Unión debe reforzar y profundizar su presencia en América Latina si nuestros Acuerdos de Asociación con América Central, el Acuerdo Multipartes con Perú y Colombia y el eventual con MERCOSUR dinamizan nuestro comercio bilateral.

En la cumbre UE/ China celebrada en Nanjing en 2009 (el 6-10-2010 tuvo lugar en Bruselas la siguiente cumbre) ambas partes acordaron abrir un diálogo tripartito entre la UE, China y África. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo tenemos que solicitar a la Alta Representante que, a la mayor brevedad posible, propusiera el establecimiento de un diálogo tripartito, político y de cooperación, entre la UE, China y América Latina - Caribe.

Los socialdemócratas europeos deben aspirar a llevar más lejos las relaciones euro-latinoamericanas y deben conceder una prioridad mayor a esta política que hasta ahora.

Los retos de la actual legislatura

El Grupo S&D ha de dotarse de unas líneas estratégicas de actuación parlamentaria, así como adoptar una serie de medidas operativas para tratar de dar respuesta desde el PE y desde EuroLat a las nuevas realidades latinoamericanas, muy distintas de las conocidas a principios de la anterior legislatura -nuevos, plurales y dinámicos escenarios políticos; titubeantes y contradictorios procesos de integración regional y subregional-, aunque con un denominador común: la insuficiencia de la política latinoamericana de las instituciones y fuerzas políticas de la UE.

La Unión debe reforzar y profundizar su presencia en América Latina si nuestros Acuerdos de Asociación con América Central, el Acuerdo Multipartes con Perú y Colombia y el eventual con MERCOSUR dinamizan nuestro comercio bilateral

En el transcurso de la séptima legislatura europea, afrontaremos desafíos en los que las instituciones europeas, incluida EuroLat, deberán pronunciarse sobre asuntos de alcance estratégico en las relaciones UE-AL.

Tomando en consideración los nuevos poderes que el Tratado de Lisboa ofrece al Parlamento Europeo es necesario llevar a cabo un seguimiento riguroso y más estructurado, en estrecha colaboración con la Comisión Europea, de los desarrollos políticos y de los acuerdos y convenios firmados con América Latina con el fin de definir una posición socialista clara respecto a los conflictos que pudieran surgir, prestando particular atención a los Acuerdos Comerciales.

En primer lugar, la política latinoamericana de la UE ha quedado obsoleta debido a los cambios que han

tenido lugar en ambas regiones y en el escenario internacional. Después de que la ampliación y la puesta en marcha de la política de vecindad contribuyeran a desplazar el centro de atención de la UE hacia el Este y el Mediterráneo, el trabajo de la Presidencia Española supuso introducir una cierta diversificación del mapa de los intereses exteriores de la UE con un impulso definitivo a las relaciones con ALC, reforzando el papel de la UE como actor global y a AL como socio estratégico de la UE. En efecto, la Comisión europea y la Presidencia española del Consejo trataron de llevar a cabo una actualización de esa política, cuyos resultados habrá que evaluar en su momento a la luz de la realización de los objetivos plasmados en el Declaración y el Plan de Acción de Madrid 2010.

En segundo lugar, han de impulsarse los procesos de integración regional. En este sentido, tomamos nota de la conclusión positiva de las negociaciones sobre el acuerdo de asociación UE-Centroamérica y del acuerdo comercial multipartes entre la UE y Colombia y Perú, así como de la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo de asociación UE-Mercosur. En este marco, el Grupo S&D deberá cuidar que se respeten las «líneas rojas» que defiende, en particular en materia de defensa y respeto de los derechos humanos, de la normativa social, sanitaria, medioambiental y de protección de los consumidores, a fin de alcanzar un acuerdo que promueva una relación de intercambio equilibrado que redunde en beneficio de los ciudadanos y las economías de ambos continentes.

La crisis de la CAN condujo a la decisión de la Comisión europea (noviembre de 2008) de promover acuerdos bilaterales, lo cual parece abrir la vía a la opción por un modelo bilateral de las relaciones entre la UE y los países latinoamericanos.

En tercer lugar, el calado de la relación estratégica UE-ALC se pondrá a prueba en los próximos años por la forma en que ambas regiones den respuesta conjunta a las consecuencias sociales de la crisis económica y financiera mundial, combatan el cambio climático y colaboren en la diversificación del modelo energético, sin dejar de lado el necesario trabajo coordinado de ambas regiones en los diversos foros internacionales que abordan la reforma de las instituciones internacionales, en concreto del sistema financiero mundial.

En cuarto lugar, la cuestión migratoria habrá de ocupar un espacio relevante en la política latinoamericana de la UE. Una de las principales aportaciones del reciente estudio del «Grupo de reflexión sobre el futuro de Europa» liderado por Felipe González era el alarmante dato del desarrollo demográfico Europeo: Europa necesitará para poder sostener sus niveles de vida presentes al rededor de 100 millones de inmigrantes más en 20 años. América Latina goza de unas enormes coincidencias culturales con Europa y de una mano de obra cualificada y bien formada. Apostar por un diálogo estructurado con América Latina en el tema de las migraciones es una apuesta progresista y de futuro que interesa a ambas regiones. Hemos de propiciar

que, en el marco de la negociación de los Acuerdos UE-ALC, se estudien las modalidades de aplicación de la normativa migratoria europea a los ciudadanos latinoamericanos que emigran a la UE. En este punto, es preciso subrayar el papel desempeñado por S&D en el seno del grupo de trabajo de Eurolat sobre emigración, cuyas conclusiones, elevadas a la sesión plenaria de Eurolat en Sevilla (mayo de 2010) y a la posterior Cumbre de Madrid, son un ejemplo de las posibilidades del diálogo parlamentario interregional.

En último lugar, América Latina es suelo de un número importante de empresas europeas multinacionales en una gran variedad de sectores con una influencia clave en el desarrollo y la cohesión social de América Latina. Convertir a las grandes empresas europeas en referentes y líderes de la cultura de Responsabilidad Social Empresarial en América Latina consolidará nuestra presencia económica.

Como proyecciones y desafíos se plantea por una parte, aumentar la competitividad de la Región e insertar aún más su economía en los mercados globales y, por otra parte, potenciarla como corredor económico de intercambio comercial intrazonal con fuerte sesgo industrial

Elementos para una estrategia del Grupo S&D hacia Latinoamérica

La actividad parlamentaria de S&D en el ámbito latinoamericano tiene que dar un salto cualitativo. Mediante este documento de orientación, pretendemos contar con un elenco de líneas de actuación que favorezcan tomas de posición más coherentes y coordinadas, al tiempo que tratamos de ganar en visibilidad. Estos elementos políticos de estrategia parlamentaria podrían permitir al Grupo, por una parte, superar una etapa de reacciones puntuales, en general trufadas de improvisación, ante los asuntos de

la actualidad política latinoamericana o ante los asuntos de urgencia que llegan al PE; por otro, acompañar la acción de la diplomacia parlamentaria con tomas de posición política más comprometidas desde el punto de vista ideológico.

En los próximos cuatro años de legislatura europea, nuestra acción en el PE y en Eurolat se inspirará, entre otras, en estas líneas de orientación general sobre política latinoamericana:

- Fortalecimiento del **diálogo político** y apoyo a la profundización de las relaciones de la UE-AL a través de la potenciación del papel de **Eurolat** y del impulso de nuevos mecanismos que ayuden a mejorar el conocimiento mutuo y actualicen el debate sobre los valores compartidos. Trabajaremos para conseguir una política de la UE activa y eficaz para ambas regiones;
- Trabajar para que se considere la promoción de la **cohesión social** como un aspecto prioritario de la política de ayuda y de cooperación al desarrollo de la UE. En el contexto de la globalización, la promoción de la cohesión social tiene como objetivo construir sociedades solidarias, que ofrezcan oportunidades reales a todos los ciudadanos, incluidos los más desfavorecidos, de acceder a los derechos fundamentales y al empleo, de beneficiarse del desarrollo económico y del progreso social e integrarse así plenamente en la sociedad. La promoción de la cohesión social es esencial para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión. En este contexto, la **política educativa** constituye la pieza clave de las políticas sociales dirigidas al establecimiento de sociedades solidarias y más igualitarias en América latina;
- Seguir apoyando la **democratización** y la **protección de los derechos humanos**, en particular en ámbitos como la representación de todos los ciudadanos en la vida política; la cooperación con la sociedad civil y la promoción del diálogo entre los agentes sociales; el acceso a la justicia y el fortalecimiento del poder judicial; la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico;
- Reforzar el diálogo con las fundaciones integradas en la Red de Centros Progresistas (Fundación Chile 21, Fundación Perseu Abramo de Brasil; Fundación Liber Seregni de Uruguay, Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales de Argentina; Fundación Friedrich Ebert, Instituto Pablo Iglesias de la Fundación Ideas, Fundación Jean Jaurès) y con la Fundación EUROLAC creada por la Cumbre de Madrid de mayo

de 2010, con el objetivo, entre otros, de fortalecer la implicación de la sociedad civil en la construcción de una alianza estratégica con América Latina.

- Impulsar el diálogo sobre el **desarrollo sostenible** y los asuntos medioambientales, a fin de lograr, entre otros objetivos, que los países latinoamericanos se involucren de forma más efectiva en la lucha contra el cambio climático, en la diversificación del modelo energético y en la seguridad energética;
- Apoyar los procesos de **integración regional y subregional** en América latina con el fin de potenciar las relaciones entre las dos regiones en materia comercial y económica, de democratización, de protección de los derechos humanos y de cohesión social en beneficio mutuo;
- Asegurar el seguimiento de los acuerdos cuyas negociaciones han concluido, así como de las emprendidas con Mercosur -a las cuales el PE debería en consecuencia estar estrechamente asociado a todos los niveles de la negociación siguiendo lo previsto en el Tratado de Lisboa-, defendiendo la incorporación de la dimensión de cohesión social y desarrollo como un elemento fundamental en todos los capítulos de los Acuerdos. Estamos convencidos que esta «red» de Acuerdos mejorará las interdependencias comunes generadas por la globalización, como por ejemplo, los riesgos medioambientales, la seguridad alimentaria o los retos energéticos. Es necesaria también una cooperación más estrecha en la política de pesca, por ejemplo dentro de la nueva Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur, a fin de lograr buenas relaciones y una gestión sostenible de los recursos pesqueros.

Frente a la derecha europea que enmascara, avala y no condena por principio violaciones de los derechos humanos, o rupturas democráticas y golpes de estado de fuerzas ideológicamente afines como en Honduras, Venezuela o Ecuador, se hace necesaria la explicación de un discurso socialdemócrata sólido y coherente basado en el diálogo exigente y constructivo que permita lograr importantes avances en materia de democracia, derechos humanos, desarrollo y erradicación de la pobreza, sin aislar a ningún país de América Latina, obstaculizar la integración regional ni abandonar a sus ciudadanos. Así a diferencia de la derecha instalada todavía en una dinámica de «guerra fría», los socialdemócratas no debemos caer en la trampa de identificar la política de diálogo

constructivo y exigente con la afinidad ideológica. Con ello se marcaría una diferencia fundamental con la derecha: los socialdemócratas condenamos todas las violaciones de derechos humanos, y promovemos el diálogo con todos los regímenes como oportunidad y única vía posible para exigir mejoras en los mismos. En línea con la reciente experiencia de interlocución con gobiernos no afines como Colombia o la dictadura cubana, el reto del Grupo S&D es desempeñar un papel imprescindible en el diálogo con todos los países de América Latina contribuyendo, desde sus posiciones, a que las relaciones bilaterales y regionales de la UE permitan obtener compromisos y resultados.

Propuesta sobre una agenda de trabajo

Desde el punto de vista operativo, el objetivo prioritario es alcanzar la mejor coordinación posible de la actividad de S&D en el ámbito latinoamericano. A tal efecto, se propone el mantenimiento del grupo de trabajo sectorial, presidido por el coordinador de S&D en Eurolat, que se reúne periódicamente a los miembros de Eurolat, de las delegaciones para las relaciones con los países de América Central, CAN y Mercosur, y de las Comisiones Parlamentarias Mixtas UE-México y UE-Chile. Asimismo este grupo de trabajo estará en relación con las comisiones parlamentarias (AFET, DEVE e INTA) cuando éstas aborden asuntos relacionados con AL.

En concreto, y sin ánimo de ser exhaustivos, el Grupo S&D trabajará por desarrollar las siguientes iniciativas:

- Hacer el seguimiento, en relación con las comisiones y delegaciones parlamentarias competentes, de los acuerdos rubricados (UE-Centroamérica y países andinos) o en curso de negociación (Mercosur);
- Seguimiento de los trabajos de las comisiones parlamentarias mixtas que controlan la ejecución de los Acuerdos de Asociación UE-Chile y UE-México;
- Asociar Eurolat a la actividad del PE en política latinoamericana;
- Tomar iniciativas en Eurolat con relación a los asuntos en los que el PE se muestra inactivo, como, por ejemplo, las relaciones interamericanas o las relaciones triangulares UE-ALC-EE UU, UE-ALC-África, UE-ALC-Asia/Pacífico.

Sugerimos que la Presidencia del Grupo defina el papel del **foro sobre América latina**, a fin de dotarle de mayor regularidad y visibilidad.

El **blog** de S&D en Eurolat *-Tendiendo puentes-* precisa una nueva definición que abra otra etapa más interactiva y participativa y que promueva la creación de la red progresista de parlamentarios europeos y latinoamericanos.

La consolidación y el desarrollo del arco progresista en Eurolat será una de las prioridades del Grupo en la Asamblea. Para ello, en primer lugar, se fomentará la participación de representantes latinoamericanos en el foro sobre América latina y en el *blog*. En segundo lugar, se organizará una reunión preparatoria de diputados de S&D y parlamentarios progresistas latinoamericanos con vistas a la V Sesión Plenaria de Eurolat, prevista para el primer semestre de 2011, y en general para preparar futuras sesiones plenarias y reuniones de comisión. En tercer lugar, aprovechando las reuniones de la Mesa y las Comisiones de Eurolat, intentaremos dar pasos adelante en la coordinación con los representantes latinoamericanos del polo o arco progresista.

La visión latinoamericana de los Socialdemócratas Europeos

El documento de posición *Política Latinoamericana* del Grupo S&D (GSD) se propuso definir los principales lineamientos de una estrategia hacia América Latina a partir de un diagnóstico de las principales tendencias observadas en la región en el plano económico y político.

Dada la estrecha relación establecida entre diagnóstico y propuesta es preciso analizar las principales conclusiones de esta descripción regional de manera de poder establecer de mejor forma la pertinencia de las opciones existentes y las propuestas que hace el GSD.

I. El diagnóstico

Entérminos generales el diagnóstico propuesto contiene un análisis mixto, esto es un conjunto de apreciaciones acertadas y otras que no se corresponden plenamente con la realidad latinoamericana. Llama particularmente la atención la caracterización que el GSD hace de las comunalidades que existirían entre las poblaciones de ambas regiones, de la dinámica política latinoamericana, así como de las condiciones económico-sociales existentes en la región y sus proyectos de integración y relaciones internacionales.

El diagnóstico se inicia con una apreciación algo excedida de las coincidencias entre europeos y latinoamericanos, quienes supuestamente “tienen las mismas aspiraciones¹”. Solo a modo de ejemplo, esta sobre ponderación se puede apreciar en la comparación que el GSD hace respecto a la satisfacción con la democracia, la que contradiciendo lo postulado muestra grandes diferencias: en la Unión Europea (UE) un 54%², en América Latina un 29%³.

Las comunes aspiraciones no necesariamente sirven de base o son un estímulo adicional para establecer una política hacia determinadas naciones. Basar o intentar encontrar sustento para una política exterior

en las comunalidades entre dos regiones conlleva el riesgo de sobreponderar una eventual comunidad de intereses desviando la mirada y minimizando aquellos ámbitos y temas donde se han dado y se enfrentan las principales diferencias y conflictos de intereses, cuya solución son en definitiva los temas prioritarios en una relación. En efecto, uno de los principales problemas a resolver en las relaciones UE-América Latina son las barreras arancelarias y no arancelarias en el mercado agrícola tema de múltiples ramificaciones económicas, políticas sociales y migratorias.

1. La situación política

El mismo sesgo se puede apreciar en la afirmación que los gobiernos progresistas en la región serían parte de “una posible tendencia estructural porque la hegemonía progresista se prolonga ya por más de una década”, así como en el establecer que “países de AL están gobernados mayoritariamente por fuerzas políticas de izquierda y de centro-izquierda”. Estas aseveraciones ameritan ser constatadas de manera más rigurosa toda vez que junto a la elección de gobiernos de izquierda o centro-izquierda también se observa un aumento de la presencia de partidos y orientaciones de derecha como en los actuales gobiernos de Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá y México. Incluso en algunos gobiernos de izquierda o centro-izquierda las diferencias con sus oponentes de derecha en la recta final electoral ha sido mínima (Perú) o bien no tienen mayoría parlamentaria para lograr sus metas originales (Paraguay).

De igual forma, y aun cuando el GSD lo reconoce, las fuerzas de izquierda y centro-izquierda son muy diversas y divididas, lo cual muestra una realidad plural y cambiante que no se puede proyectar simple y unilateralmente a futuro. Importantes contrastes se observan, por ejemplo, en los gobiernos de Venezuela y Brasil (vice presidentes de derecha de Lula y Dilma) quienes implementan políticas muy distintas entre sí como para sacar conclusiones válidas respecto a sus comunes orientaciones de política interna y, más aún, en materias de política exterior. Por consiguiente, la aproximación del GSD a los mismos deberá variar sustancialmente en función de una agenda que se organice más allá de las comunalidades.

1.-Todas las citas textuales provienen del documento señalado.

2.-Estimaciones para el mismo año

http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/showtable.cfm?keyID=3&nationID=11,12,16,13,6,3,4,7,8,9,12,5,14,1015,&startdate=2004.04&enddate=2004.04

3.-<http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103%20articles/Latinbarometer2004%20Final.pdf>

Un tema más grave en el análisis del GSD respecto a la región dice relación con algunos supuestos implícitos en su diagnóstico. Así, los socialdemócratas europeos consideran que el compromiso de los gobiernos de izquierda con la alternancia en el poder -salvo excepciones- sería el principal elemento demostrativo de su respeto a la democracia. Tal como lo indica el documento en referencia, “El afianzamiento definitivo, consolidado, de la democracia en América Latina se dará cuando los gobiernos puedan cambiar y alternarse sin que ello suponga un riesgo para la estabilidad del país correspondiente”. Sin embargo, este énfasis en la alternancia revela una concepción procedimentalista

En este contexto, el Grupo tiende a descartar los golpes militares como solución a estas crisis, aventurando demasiado su estimación acerca de la estabilidad de la región. Honduras muestra lo contrario. Las acusaciones del presidente Morales sobre posible uso de la fuerza para sacarlo del poder también intranquilizan.

de la democracia, ya que ella -que podría ser condición necesaria para la estabilidad democrática- no es condición suficiente del afianzamiento y consolidación definitiva de la democracia en la región. Además, gran parte de los gobiernos progresistas en América Latina tienen una visión estatalizada de su gestión limitando y desconfiando de la participación institucionalizada de la ciudadanía. Este rasgo característico que debería llamar la atención del GSD y abrir un nuevo

espacio a su reflexión sobre la región.

Un tercer aspecto debatible del análisis se refiere a la situación de los partidos políticos. Aun cuando el documento indica que “En cinco países se observa la aparición de partidos y movimientos que no sólo han dado al traste con los partidos tradicionales de la izquierda sino también con el sistema tradicional de partidos de sus respectivos países”, el Grupo no saca las debidas conclusiones de esta situación al no situar el problema al interior de la generalizada crisis de representación en América Latina, de las limitaciones de sus instituciones políticas representativas -congresos, partidos políticos- y de la escasa o nula participación ciudadana. De igual forma, no percibe los peligros que entraña para el futuro democrático latinoamericano el fenómeno recurrente del presidencialismo plebiscitario, con la permanente tentación de la prolongación de mandatos, la que no es sino otra cara de esta misma situación.

En este contexto, el Grupo tiende a descartar los golpes militares como solución a estas crisis, aventurando demasiado su estimación acerca de la estabilidad de la región. Honduras muestra lo contrario. Las acusaciones del presidente Morales sobre posible uso de la fuerza para sacarlo del poder también intranquilizan.

Considerando todo lo anterior, el GSD debería destinar mayor atención a las diversas situaciones de crisis política y de representación en la región que son comunes pero que tienen características idiosincráticas, así como atender al tema del insuficiente control democrático sobre las fuerzas armadas.

2. Desigualdad, pobreza, indigencia

Respecto a los temas de desigualdad, pobreza e indigencia, el Grupo acertadamente muestra los principales problemas que aquejan a la región, así como los avances que en estas materias han realizado los gobiernos latinoamericanos después de la crisis de 2008. Sin embargo, el problema que no se menciona -y quizás el más importante en estas materias- es la alta elasticidad negativa del empleo de los sectores más pobres, el que cae muy fuertemente en situaciones de crisis y no se recupera de igual forma en períodos de bonanza.

Dado que la calidad del empleo y de las remuneraciones son los factores que determinan los niveles de desigualdad, pobreza e indigencia, es necesario un análisis más a fondo de la situación del empleo en la región, de las formas de mejorarlo, especialmente entre los jóvenes, de manera de superar las condiciones socio-económicas negativas mencionadas como la concentración del ingreso, las exclusiones y la falta de cohesión social.

Igualmente, sería necesario considerar que la bonanza económica de algunos países latinoamericanos, gracias al aumento de los precios de los *commodities* no ha sido permanente y no ha logrado alcanzar a quienes demandan mejores condiciones socio económicas (caso de Bolivia).

3. Relación crecientemente comercializada después de procesos democratizadores.

En el análisis de las relaciones entre ambas regiones el Grupo tiende a subrayar en forma unilateral el sello económico, destacando como centrales los acuerdos comerciales y de asociación, así como el papel de las empresas europeas en la región. Al respecto indica que:

“La Unión debe reforzar y profundizar su presencia en América Latina si nuestros Acuerdos de Asociación con América Central, el Acuerdo Multipartes con Perú y Colombia y el eventual con MERCOSUR dinamizan nuestro comercio bilateral [...] Tomando en consideración los nuevos poderes que el Tratado de Lisboa ofrece al Parlamento Europeo es necesario llevar a cabo un seguimiento riguroso y más estructurado, en estrecha colaboración con al Comisión Europea, de los desarrollos políticos y de los acuerdos y convenios firmados con América Latina con el fin de definir una posición socialista clara respecto a los conflictos que pudieran surgir, prestando particular atención a los Acuerdos Comerciales”.

En la medida que el GSD no identifica aquellos puntos de conflicto comercial y económico más agudo entre la UE y América latina, la postura socialdemócrata respecto de este tipo de relaciones no queda clara ya que los conflictos no es que “puedan surgir”, sino que ya están en la mesa de negociación con mucha antelación.

De igual forma, el GSD le da un protagonismo exagerado a las empresas europeas multinacionales operando en la región, afirmando que:

“América Latina es suelo de un número importante de empresas europeas multinacionales en una gran variedad de sectores con una influencia clave en el desarrollo y la cohesión social de América Latina. Convertir a las grandes empresas europeas en referentes y líderes de la cultura de Responsabilidad Social Empresarial en América Latina consolidará nuestra presencia económica”.

El sumarse de manera acrítica a la cuestionable política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) -que maximiza utilidades vía una política de mercadeo que no cumple con principios básicos de proteger los intereses de sus empleados-, le otorga un protagonismo desmedido al actor privado en desmedro del Estado.

De acuerdo a la experiencia reciente, este último es el único que está en condiciones de generar políticas tendientes a superar la desigualdad, la exclusión y pobreza en la región, superando la neutralidad de mercado que impulsan los grupos empresariales en la región.

Una segunda consideración al respecto dice relación al tipo de vínculo económico que se da entre ambas regiones. En términos del origen de las corrientes de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe, de acuerdo a la CEPAL, la UE es un actor

menor en esta región y los Estados Unidos continúan siendo el principal inversionista en 2010 con un 17%, seguido por los Países Bajos (13%), China (9%) y Canadá, España y el Reino Unido (4%). De esta forma, la presencia europea se da fundamentalmente en el ámbito comercial, en el centro del cual se encuentra el conflicto permanente entre ambas regiones producto de los subsidios agrícolas de la UE que perjudican las exportaciones latinoamericanas, al que hemos hecho referencia más arriba.

El GSD destaca los acuerdos de asociación UE-Centroamérica, el acuerdo comercial multipartes entre la UE y Colombia

y Perú, la reanudación de las negociaciones UE-Mercosur. Y si bien está consciente que estos acuerdos deben cuidar las que llama “líneas rojas” -defensa y respeto de los derechos humanos, de la normativa social, sanitaria, medioambiental y protección de los consumidores- le da a la relación comercial un rol en el desarrollo económico y político latinoamericano que no necesariamente tiene.

Así, afirma la necesidad de “Apoyar los procesos de integración regional y subregional en América latina con el fin de potenciar las relaciones entre las dos regiones en materia comercial y económica, de democratización, de protección de los derechos humanos y de cohesión social en beneficio mutuo”.

De la misma forma, el énfasis puesto en las empresas privadas como actor central en esta relación deja al Estado fuera del espacio estratégico de interacción, en condiciones que la superación de los actuales niveles de pobreza y de concentración de la riqueza pasan por un fuerte cambio del modelo de desarrollo incorporando más valor agregado a las exportaciones gracias a un fuerte proceso de reforma estructural que no tiene otra fuerza impulsora que el Estado.

4. Integración.

El GSD es enfático en afirmar que “han de impulsarse los procesos de integración regional” no solamente para potenciar las relaciones comerciales y económicas

De acuerdo a la experiencia reciente, este último es el único que está en condiciones de generar políticas tendientes a superar la desigualdad, la exclusión y pobreza en la región, superando la neutralidad de mercado que impulsan los grupos empresariales en la región

entre las dos regiones sino también para apoyar la “democratización, protección de los derechos humanos y de cohesión social”. Al respecto, cabe la legítima duda acerca de los positivos efectos políticos de la integración regional y de aquella entre la UE y América Latina.

América Latina en este período observa una crisis de los proyectos de integración, existiendo una diversidad de modelos, tendencias e intenciones. Los esfuerzos gubernamentales de integrar las economías regionales se han debilitado o definitivamente fallado. Tales son los casos de ALADI, ALAC, Mercosur y CAN, así como otras iniciativas más políticas como el ALBA, UNASUR y Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLN). En relación a estas dos últimas iniciativas, Brasil impulsó UNASUR para excluir al México integrado al NAFTA (a quién, finalmente, aceptaría como observador). Ante esta exclusión, México creó la Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLN), todo lo cual muestra el carácter político coyuntural de tales iniciativas aparentemente integracionistas.

Frente a ellas, en la actualidad el sector privado está independientemente creando nuevos marcos de integración al margen de las gubernamentales. Países con gobiernos afines como México, Perú, Colombia y Chile están potenciando sus sectores privados creando a través del Acuerdo del Pacífico un mercado de 200 millones de personas con un PIB sobre los \$1.6 billones, cercano a la economía brasilera. Previamente, las bolsas de Bogotá, Lima y Santiago fueron integradas en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) creando un mercado bursátil mayor que el Bovespa y el BMV de México. Las inversiones intra latinoamericanas han crecido generosamente siendo Brasil y Chile los más dinámicos.

De acuerdo a estas realidades, el GSD más que fomentar los acuerdos comerciales entre la UE y América Latina debería preocuparse de cómo el desarrollo de los países de la región puede y debe superar los temas que el mismo GSD destaca, pobreza y desigualdad, a través de otros caminos, complementarios, pero distintos a los del sector privado.

5. Relaciones internacionales.

Las relaciones de América Latina con los EE.UU., y especialmente con la UE y China, ocupan una importante parte del documento del GSD, en el cual se deja ver la preocupación por la expansión de la presencia económica y comercial de esta última en la

región. El GSD se pronuncia por “un diálogo tripartito, político y de cooperación, entre la UE, China y América Latina-Caribe. [...] Los socialdemócratas europeos deben aspirar a llevar más lejos las relaciones euro-latinoamericanas y deben conceder una prioridad mayor a esta política que hasta ahora”.

Aún cuando la presencia China es importante, más lo es la configuración de nuevas articulaciones internacionales como el BRICSA (Brasil, India, China y Sud África) en las cuales el objetivo no es solo comercial, sino principalmente político al proponerse crear y/o democratizar instancias de gobernabilidad global.

En suma, el diagnóstico propuesto nos parece considera comunalidades inter regionales que no existen, contiene un diagnóstico desproporcionado de la influencia de la izquierda y centro-izquierda en la región, desconsidera la fuerza de la derecha y del factor militar, no considera el problema del empleo como clave y adolece de una confianza ingenua en el comercio como generador de empleo decente, favorece una relación bilateral centrada en el comercio que privilegia al sector privado en vez del Estado, se propone un compromiso con la integración sin entenderla bien, y muestra una preocupación por las relaciones internacionales de América Latina centrada en lo comercial y económico en desmedro de lo político global.

II. La Agenda

Los socialdemócratas europeos reconocen la insuficiencia de la política latinoamericana al interior de las instituciones y fuerzas políticas de la UE, asociándola a los desafíos que enfrenta en otras regiones del mundo. Sin embargo, el Grupo no logra proponer medidas que superen estas limitaciones dándole a la política hacia América Latina un peso distinto.

La agenda que el Grupo propone contiene orientaciones de importancia junto a otras más débiles producto de los problemas de diagnóstico antes mencionados.

1. Se propone el fortalecimiento del diálogo político y apoyo a la profundización de las relaciones de la UE-AL a través de la potenciación del papel de Eurolat, sin evaluar exhaustivamente sus limitaciones. Esto que queda en evidencia cuando se propone “impulsar nuevos meca-

nismos que ayuden a mejorar el conocimiento mutuo y actualicen el debate sobre los valores compartidos”. Al respecto el diálogo político debería tener como primera prioridad, más que la actualización del mutuo conocimiento, el desarrollo de una agenda pragmática compartida, dado que los temas que el GSD presenta como prioritarios pueden no ser igualmente percibidos por las contrapartes latinoamericanas.

2. Destaca la cohesión social como un aspecto prioritario de la política de ayuda y de cooperación al desarrollo, y establece que “la política educativa constituye la pieza clave de las políticas sociales dirigidas al establecimiento de sociedades solidarias y más igualitarias en América latina”. De esta forma el Grupo no considera las determinaciones estructurales que hacen que la educación -que ya ha logrado amplios niveles de cobertura en la región- no tenga resultados eficientes. La cohesión social es un derivado de la integración de los marginados a los beneficios de un desarrollo sustentable, integración que se realiza gracias a empleos dignos producto de capacidades sindicales superiores a las actuales. La educación por si misma nunca podrá generar estos resultados si no se redistribuye el poder en cada país de la región, el que en la actualidad se encuentra concentrado y centralizado en reducidas elites.
3. El Grupo se compromete con seguir apoyando la democratización y la protección de los derechos humanos⁴ en particular en ámbitos como la representación de todos los ciudadanos en la vida política; la cooperación con la sociedad civil y la promoción del diálogo entre los agentes sociales; el acceso a la justicia y el fortalecimiento

4.-Al respecto se propone: “Frente a la derecha europea que enmascara, avala y no condena por principio violaciones de los derechos humanos, o rupturas democráticas y golpes de estado de fuerzas ideológicamente afines como en Honduras, Venezuela o Ecuador, se hace necesaria la explicación de un discurso socialdemócrata sólido y coherente basado en el diálogo exigente y constructivo que permita lograr importantes avances en materia de democracia, derechos humanos, desarrollo y erradicación de la pobreza, sin aislar a ningún país de América Latina, obstaculizar la integración regional ni abandonar a sus ciudadanos. Así a diferencia de la derecha instalada todavía en una dinámica de «guerra fría», los socialdemócratas no debemos caer en la trampa de identificar la política de diálogo constructivo y exigente con la afinidad ideológica. Con ello se marcaría una diferencia fundamental con la derecha: los socialdemócratas condenamos todas las violaciones de derechos humanos, y promovemos el diálogo con todos los regímenes como oportunidad y única vía posible para exigir mejoras en los mismos. En línea con la reciente experiencia de interlocución con gobiernos no afines como Colombia o la dictadura cubana, el reto del Grupo S&D es desempeñar un papel imprescindible en el diálogo con todos los países de América Latina contribuyendo, desde sus posiciones, a que las relaciones bilaterales y regionales de la UE permitan obtener compromisos y resultados”

del poder judicial; la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico.

Coincidiendo en que estos son elementos centrales de una agenda, sería conveniente especificar las formas a través de las cuales esta ambiciosa agenda de nueve componentes se materializaría.

La representación de todos los ciudadanos en la vida política requiere una profunda reforma de los sistemas de representación en la región, de partida limitando el poder de las presidencias y aumentando la de los congresos, además de otras medidas. La cooperación con la sociedad civil requiere de un marco institucional que permita la participación de la sociedad organizada en la toma de decisiones y evaluación de políticas públicas. La promoción del diálogo entre los agentes sociales exige un fortalecimiento del sindicalismo y de la negociación colectiva. El acceso a la justicia y el fortalecimiento del poder judicial, la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, a su vez requieren de profundas reformas institucionales que, a diferencia de los acuerdos económicos y comerciales, le abrirían a los socialdemócratas europeos un amplio espacio de cooperación con las fuerzas democratizadoras latinoamericanas.

4. El Grupo se propone reforzar el diálogo con las fundaciones integradas en la Red de Centros Progresistas para “fortalecer la implicación de la sociedad civil en la construcción de una alianza estratégica con América Latina”. Esta es una tarea clave en la perspectiva de consolidar el trabajo de estos centros en la región y, al mismo tiempo, obtener el apoyo institucional latinoamericano en la definición de aquellos temas prioritarios que deberían incluirse en una agenda compartida, especificando las formas de su implementación.
5. Se compromete con establecer e impulsar el diálogo sobre el desarrollo sostenible y los asuntos medioambientales, “a fin de lograr que los países latinoamericanos se involucren de forma más efectiva en la lucha contra el cambio climático, en la diversificación del modelo energético y en la seguridad energética”.

En este aspecto el documento del GSD debería ser más crítico de las empresas multinacionales europeas que operan en la región ya que algunas de ellas se han convertido en objeto de crítica social masiva al dificultar y, en algunos casos, impedir de hecho la diversificación de la matriz energética en algunos países como Chile.

6. Finalmente, el Grupo insiste en apoyar los procesos de integración regional y subregional en América latina “con el fin de potenciar las relaciones entre las dos regiones en materia comercial y económica, de democratización, de protección de los derechos humanos y de cohesión social en beneficio mutuo”, temas que ya hemos visto no tienen relación directa entre sí⁵.

III Conclusiones

El GSD se ve enfrentado a una doble tarea. Por una parte, tiene “que definir qué izquierda latinoamericana le es más afín” y, por la otra, “también desarrollar la naturaleza de las relaciones que quiere mantener con ella y cual es la relación que debemos mantener con la izquierda llamada populista”. A esta altura del análisis tal disyuntiva parece ser artificial toda vez que una agenda bien perfilada y efectivamente compartida destilaría las alianzas pertinentes y posibles. De esta forma, más que identificar interlocutores privilegiados el Grupo debería establecer una agenda a partir de y en torno a la cual se organizaría su sistema de alianzas estratégicas.

De acuerdo a sus propias orientaciones, el Grupo debería formular una agenda que priorizara temas regionales como la crisis de representación y participación ciudadana, con especial atención a la situación de los derechos humanos. En vez de cohesión social como foco de su atención el Grupo debería centrar su atención en el fortalecimiento de las instituciones políticas democráticas. De igual forma, más que un gran esfuerzo en materia educacional

debería concentrarse cómo fortalecer la acción del Estado en el proceso de innovación científica y tecnológica dándole al desarrollo latinoamericano un nuevo horizonte de despliegue.

En materia de los asuntos globales, el Grupo en conjunto con sus contrapartes latinoamericanas debería desarrollar acciones en el área de la gobernabilidad internacional y el control financiero. Igualmente, tendría que generar iniciativas conjuntas para la protección del medio ambiente incluidos los temas de la minería en la región, la producción de energía y la pesca. Y en el tema de las migraciones debería retomar el enfoque del co-desarrollo incluyendo el tema de remesas⁶.

Los mecanismos para llevar a cabo estas iniciativas revisten especial importancia. Así, además de evaluar las actividades de Eurolat, sería necesario establecer los niveles de sinergia institucionalizada entre la Red de Centros Progresistas, el GSD, un posible arco progresista en Eurolat y el Foro sobre América Latina, de manera de maximizar recursos y tener un marco organizacional con mayor fuerza para impulsar una agenda propia en la UE.

Finalmente, es preciso que los socialdemócratas europeos desarrollen mecanismos de intervención comunicacional eficientes, más allá de *Tendiendo Puentes*, de manera de poder alcanzar un seguimiento eficaz y público de las tareas encargadas y una estrategia de fuerte incidencia masiva.

5. La propuesta que le sigue, continúa en la misma dirección: “Asegurar el seguimiento de los acuerdos cuyas negociaciones han concluido, así como de las emprendidas con Mercosur -a las cuales el PE debería en consecuencia estar estrechamente asociado a todos los niveles de la negociación siguiendo lo previsto en el Tratado de Lisboa-, defendiendo la incorporación de la dimensión de cohesión social y desarrollo como un elemento fundamental en todos los capítulos de los Acuerdos. Estamos convencidos que esta «red» de Acuerdos mejorará las interdependencias comunes generadas por la globalización, como por ejemplo, los riesgos medioambientales, la seguridad alimentaria o los retos energéticos. Es necesaria también una cooperación más estrecha en la política de pesca, por ejemplo dentro de la nueva Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur, a fin de lograr buenas relaciones y una gestión sostenible de los recursos pesqueros”.

6.-Al respecto, en abril de 1998 el gobierno socialista de Lionel Jospin creó la Delegación Interministerial para el Codesarrollo y las Migraciones, colocando como delegado a Sami Nair a cargo del MICOMI (Misión Interministerial para el Codesarrollo y las Migraciones Internacionales), con la misión de desarrollar una política de codesarrollo, y, en concreto, asegurar la relación con los Estados de acogida.

ANÁLISIS Y PROPUESTAS - Relaciones Internacionales

Documento de posición Política latinoamericana del grupo S&G

Grupo S&G

Es el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

La visión latinoamericana de los Socialdemócratas Europeos

Augusto Varas

Licenciado en Sociología en la Universidad Católica de Chile, se graduó como Master y Doctor en Sociología en la Washington University (St. Louis), Estados Unidos. Actualmente Presidente del directorio de la Fundación Equitas.

Editores

*Alberto Koschützke
Jaime Ensignia
Bet Gerber*

El contenido representa el punto de vista de la autora y no traduce necesariamente el pensamiento de la Fundación Friedrich Ebert.

Se admite la reproducción total o parcial de este documento a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar copias a los editores

Esta publicación está disponible en internet: www.fes.cl, Publicaciones Análisis y Propuestas

Santiago, 2011

ANÁLISIS Y PROPUESTAS



La Friedrich Ebert Stiftung es una fundación política alemana. Se dedica a la labor de la asesoría y la capacitación política y ofrece espacios de debate en Alemania y en más de 100 países en todo el mundo. El objetivo de su labor es fortalecer la democracia y la justicia social. Para estos efectos, coopera con actores políticos y sociales de la más diversa índole en Alemania en Chile y en el mundo.

www.fes.cl
feschile@fes.cl